

6.ª La firma importadora deberá facilitar, además de las especificaciones que figuran en la solicitud de licencia de importación, las que hagan referencia a antigüedad de la firma, capacidad en metros cúbicos de sus almacenes e importaciones realizadas en los tres últimos años, tanto de las mercancías objeto del contingente como de cualquier otro producto agropecuario.

Madrid, 18 de febrero de 1976.—El Director general, José Ramón Bustelo.

4694

RESOLUCION de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación por la que se anuncia única convocatoria del cupo global número 6, «Sopas y preparados para sopas».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.º de la Orden de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir el cupo global número 6, en única convocatoria, «Sopas y preparados para sopas», partida arancelaria:

21.05

con arreglo a las siguientes normas:

1.ª El cupo se abre por el 100 por 100 de su importe anual, establecido por la Resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación de 1 de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 1).

2.ª Las peticiones para mercancías de países C. E. E. (Comunidad Económica Europea) se formularán en los impresos habilitados a este efecto. Para los restantes países de la O. C. D. E., en los impresos habituales (solicitudes de importación para mercancías globalizadas), que se facilitarán en el Registro General de este Ministerio o en los de sus Delegaciones Regionales.

3.ª Las solicitudes de importación deberán presentarse dentro del plazo de veinte días, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución. El plazo de presentación de las licencias será de veinte días, a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-2.

4.ª En cada solicitud deberán figurar únicamente mercancías incluidas en la partida arancelaria indicada anteriormente.

5.ª Los representantes deberán adjuntar necesariamente a la solicitud original el documento que les acredite como tales con carácter de exclusividad. Sólo serán considerados como representantes aquellas firmas que lo sean directamente de fabricantes exportadores, no considerándose como tales a los que representen a firmas comerciales extranjeras. Los certificados de representación, cuya no inclusión junto con la solicitud será motivo de denegación, deberán ser visados por la Cámara Oficial de Comercio Española en el país de origen.

6.ª En la casilla de la solicitud correspondiente a «Especificación» se indicará detalladamente la mercancía a importar y la partida arancelaria exacta que corresponda.

7.ª La firma importadora deberá facilitar, además de las especificaciones que figuran en la solicitud de licencia de importación, las que hagan referencia a antigüedad de la firma, capacidad en metros cúbicos de sus almacenes e importaciones realizadas en los tres últimos años, tanto de las mercancías objeto del cupo como de cualquier otro producto agropecuario.

Madrid, 18 de febrero de 1976.—El Director general, José Ramón Bustelo.

4695

RESOLUCION de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación por la que se anuncia única convocatoria del cupo global número 7, «Cerveza».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.º de la Orden de 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir permanentemente el cupo global número 7, «Cerveza», partida arancelaria:

22.03

con arreglo a las siguientes normas:

1.ª El cupo se abre por el 100 por 100 de su importe anual, establecido por la Resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación de 1 de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 1).

2.ª Las peticiones para mercancías de países C. E. E. (Comunidad Económica Europea) se formularán en los impresos habilitados a este efecto. Para los restantes países de la O. C. D. E., en los impresos habituales (solicitudes de importación para mercancías globalizadas), que se facilitarán en el Registro General de este Ministerio o en todas sus Delegaciones Regionales.

3.ª Las solicitudes de importación podrán presentarse en cualquier momento antes del día 30 de octubre de 1976. El pla-

zo de la presentación de la licencia será de veinte días, a partir de la fecha de salida de los ejemplares GA-2.

4.ª La firma importadora deberá presentar carta de representación exclusiva. Sólo serán considerados como representantes aquellas firmas que lo sean directamente de fabricantes exportadores, no considerándose como tales a los que representen a firmas comerciales extranjeras. Los certificados de representación, cuya no inclusión junto con la solicitud será motivo de denegación, deberán estar visados por la Cámara Oficial de Comercio Española en el país de origen.

5.ª La firma importadora deberá facilitar, además de las especificaciones que figuran en la solicitud de licencia de importación, las que hagan referencia a antigüedad de la firma, capacidad en metros cúbicos de sus almacenes e importaciones realizadas en los tres últimos años, tanto de las mercancías objeto del cupo como de cualquier otro producto agropecuario.

Madrid, 18 de febrero de 1976.—El Director general, José Ramón Bustelo.

4696

RESOLUCION de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación por la que se anuncia única convocatoria del cupo global número 8, «Harina de pescado».

La Dirección General de Política Arancelaria e Importación, en uso de la facultad atribuida por el apartado 4.º de la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, ha resuelto abrir permanentemente el cupo global número 8, «Harina de pescado», partida arancelaria:

23.01 B

con arreglo a las siguientes normas:

1.ª El cupo se abre por el 100 por 100 de su importe anual, establecido por la Resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación de 1 de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 1).

2.ª Las peticiones se formularán en los impresos habituales (solicitudes de importación para mercancías globalizadas), que se facilitarán en el Registro General de este Ministerio o en los de sus Delegaciones Regionales.

3.ª Las solicitudes de importación podrán presentarse en cualquier momento a lo largo del año 1976.

Madrid, 18 de febrero de 1976.—El Director general, José Ramón Bustelo.

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

4697

ORDEN de 30 de enero de 1976 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo seguido entre don Francisco Sáez González y la Administración General del Estado.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 304.234, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre don Francisco Sáez González, como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, contra la Resolución de este Ministerio de fecha 10 de diciembre de 1974, ha recaído sentencia en 15 de diciembre de 1975, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Sáez González contra la Administración General del Estado, debemos declarar y declaramos la desestimación de cuantas pretensiones se formulan en el escrito de demanda, por estar ajustadas a derecho la Resolución del Director general de Régimen Jurídico de la Prensa, de veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, y la Orden del Subsecretario de Información de diez de diciembre del mismo año, en el ejercicio de funciones delegadas por el Ministro de Información y Turismo, sin hacer declaración alguna en cuanto al pago de las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 30 de enero de 1978.—P. D., el Subsecretario de Información y Turismo, Cañadas Nouvilas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

4698

DECRETO 323/1978, de 23 de enero, de actuaciones urgentes del Instituto Nacional de la Vivienda en el Poblado Dirigido de Orcasitas.

La Orden de ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete regula la organización de los Poblados Dirigidos creados por Decreto de ocho de mayo del mismo año y establece que el Poblado Dirigido de Orcasitas, al igual que en los demás Poblados, existirá una Gerencia encargada de su dirección y representación jurídica con el auxilio técnico y administrativo del Instituto Nacional de la Vivienda.

Posteriormente, la Orden de diez de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve dispone que las Gerencias de los distintos Poblados Dirigidos dependerán orgánicamente del Director general de la Vivienda, habiendo sido transferidas estas funciones al Director general del Instituto Nacional de la Vivienda por Decreto de dos de febrero de mil novecientos setenta y uno.

Las especiales características de la organización y funcionamiento del Poblado Dirigido de Orcasitas, así como la complejidad de sus funciones y competencias, aconsejan su transferencia al Instituto Nacional de la Vivienda, pretendiéndose con ello conseguir una mayor agilización y celeridad en la realización de los fines para el que fue creado.

Por otra parte, y teniendo en cuenta la función social que cumplen estas construcciones de acceso a la propiedad de las familias más necesitadas y las dificultades económicas por las que atraviesa, se considera necesario autorizar al Instituto Nacional de la Vivienda para financiar totalmente en el Poblado Dirigido de Orcasitas, las construcciones y remodelaciones que sean precisas. Para ello, podrá derribar cuantas viviendas considere oportuno y construir las que hayan de sustituirlas; alojar a los ocupantes en otras viviendas o albergues provisionales en tanto se realizan las obras y dotará dicho Poblado de las instalaciones, edificaciones y servicios complementarios pertinentes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.

DISPONGO:

Artículo primero.—El Instituto Nacional de la Vivienda asumirá las competencias y funciones de la Gerencia del Poblado Dirigido de Orcasitas, que deberá rendir cuenta de su actuación y situación económica al Organismo mencionado, quedando extinguida dicha Gerencia.

Artículo segundo.—Se autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda a financiar cuantas construcciones, remodelaciones y servicios urbanísticos sean necesarios en dicho Poblado, pudiendo para ello derribar las viviendas ruinosas y construir las necesarias que hayan de sustituirlas, alojando a sus ocupantes, en tanto se realizan las obras, en otras viviendas o albergues provisionales.

Artículo tercero.—El Instituto Nacional de la Vivienda construirá viviendas sobre suelo aún no edificado del Poblado Dirigido de Orcasitas siempre dentro de las posibilidades que les permita el planeamiento urbanístico vigente.

Asimismo, derribará las viviendas ruinosas y construirá en los solares consiguientes viviendas de tipología y dimensión similares a las derruidas ajustadas a las exigencias técnicas que requiere el terreno, siempre que ello sea posible.

Artículo cuarto.—El Instituto Nacional de la Vivienda procederá a financiar las obras de reparación y conservación de las viviendas que no hayan de deruirse siendo al efecto de aplicación lo dispuesto en el Decreto de veintiuno de marzo de mil novecientos setenta.

Artículo quinto.—El Instituto Nacional de la Vivienda percibirá de los adjudicatarios de las nuevas viviendas que construya la diferencia entre el precio legal de venta que resulte aplicable a las mismas y la cantidad de amortización hasta la fecha satisfactoria por los mismos.

Artículo sexto.—Las obras a que se refiere el artículo anterior tendrán carácter de urgencia y en consecuencia, los expedientes que se instruyan se tramitarán reduciendo los plazos a la mitad según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo y las obras podrán ser contratadas por adjudicación directa al amparo de lo dispuesto en los artículos noventa y cinco y ciento diecisiete del Reglamento General de Contratos del Estado.

Artículo séptimo.—Las expropiaciones de los terrenos que sean necesarios para situar las nuevas viviendas, así como para la instalación de edificios complementarios, se llevará a cabo por el trámite de urgencia, de conformidad con lo señalado en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa, de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Artículo octavo.—El Instituto Nacional de la Vivienda podrá realizar, por contratación directa, cuantas adquisiciones y adjudicaciones de proyectos y obras sean necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza al Ministro de la Vivienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Vivienda,
FRANCISCO LOZANO VICENTE

4699

ORDEN de 16 de enero de 1978 por la que se ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Ricardo Colomer y otro contra la Orden ministerial de 25 de noviembre de 1971.

Ilmo. Sr.: En recurso acumulado contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, interpuesto por don Ricardo Colomer y otros demandantes, la Administración General, demandada, contra la Orden ministerial de 25 de noviembre de 1971 (aprobatoria del justiprecio e indemnizaciones de las fincas números 26, 37, 38, 56, 57, 76, 85, 94, 95, 96, 97, 181, 182 y 183 del área de actuación «Riera de Caldas» (hoy Santa María de Galles); se ha dictado sentencia con fecha 15 de octubre de 1975 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte la demanda en este proceso deducida por el Procurador don Alfonso Sánchez Poves, en nombre y representación de don Ricardo, don Félix, doña María Asunción, doña María Rosa y doña Montserrat Colomer Gorina, frente a la Orden del Ministerio de la Vivienda de 25 de noviembre de 1971, aprobatoria del proyecto de expropiación del área de actuación Riera de Caldas, y a la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la misma, declaramos:

Primero.—Que la citada Orden y el expediente seguido para su aprobación no han incurrido en los vicios de procedimiento ni de fondo que se denuncian por la parte apelante, a efecto de su nulidad total; desestimando, por tanto, esta primera pretensión de la demanda.

Segundo.—Que dicha Orden es contraria a derecho, y nula en consecuencia en cuanto determina los justiprecios de los terrenos de las parcelas a que se contrae la presente litis, que, estimados por su valor expectante, deberá calcularse éste de conformidad con las siguientes pautas:

A) Para todas las parcelas en litigio: Grupo de Ciudad el primero; categoría C, grado 1; coeficiente por urbanización, 3,60; módulo o coste de edificación, 1300 pesetas metro cúbico; expectativas 90 por 100.

B) Valor inicial de 42,17 pesetas para las parcelas de regadío: Números 26, 37, 38, 39, 56, 57, 76, 95 y 181; valor inicial de 32,72 para las de regadío eventual: Números 85, 94, 96, 97, 182 y 183, y un valor medio inicial de 35,66 pesetas.

C) Volumen de edificabilidad: de 2,40, las parcelas 76 (en una fracción de 10.466), 95, 181, 182 y 183; de dos metros cúbicos, las parcelas 26, 37, 38, 39, 56, 57, 76 (en una fracción de 22.215 metros cuadrados), 85, 94, 96 y 97.

Tercero.—Que el justiprecio de los restantes elementos aparte el suelo, queda fijado en las siguientes cantidades:

A) Parcela 26: Balsa, tubería hormigón, muro de contención, espigones y construcción mina, un total de 293.000 pesetas, según queda detallado en el octavo considerando.

B) Parcela 37: Canal de riego y tubos hormigón, 91.500 pesetas, como queda detallado en el mismo lugar.

C) Parcela 57: Vuelos, 5.600 pesetas.

D) Parcela 76: dos pozos, 750.000 pesetas (también detallado en el repetido considerando).

E) Parcela 97: un pozo, 20.000 pesetas.

Cuarto.—La indemnización por el aprovechamiento de algunos de estos terrenos para la instalación de vallas de publicidad, se fija en la cantidad de 250.000 pesetas.